



Violencia de Estado y guerra
psicológica en Colombia: la población
civil como objetivo militar. La
estigmatización de la protesta social

Juan Sebastián Ocampo Murillo
Magister en Filosofía
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín

Edición especial
Historia sobre la marcha

Lucem

Imagen: Natalia Medina
Instagram: @natalia.medinam

Violencia de Estado y guerra psicológica en Colombia: la población civil como objetivo militar. La estigmatización de la protesta social

Juan Sebastián Ocampo Murillo*

Resumen: La siguiente reflexión tiene como pretensión analizar las diversas representaciones sobre la violencia que se han suscitado a lo largo de la historia de Colombia. Se va a ahondar en el terror de Estado, sus causas materiales y culturales y sus tácticas de guerra psicológica. Posteriormente, la tarea es comprender las razones detrás de la estigmatización de la protesta social en Colombia y cómo el aparato gubernamental ha puesto en marcha diferentes mecanismos de represión cuya finalidad ha sido señalar a la población civil como un objetivo militar.

1. Representaciones de violencia y exclusión desde la época colonial hasta el siglo XX

A principios del siglo XVI, cuando se estaban realizando las primeras incursiones en el territorio americano que partieron desde San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién, bajo las órdenes de la Gobernación de Cartagena, las fundaciones de los primeros establecimientos se dieron en torno a la posibilidad de la explotación del oro y, posteriormente, la plata. Ello sirvió para darle cierto gozne de legitimidad a las expediciones y una estructura burocrática ya consagrada a las formas de explotación. Hasta la instauración de la encomienda, como una entidad económica, religiosa y política legal, la práctica del saqueo y las *razzias* (rescatar el oro después de una confrontación bélica) era bastante común y su justificación acaecía en los intereses particulares de grupos privados de una incipiente burguesía, que veía, en el prelude del Renacimiento, la primera emergencia capitalista: el mundo se hizo grande, las posibilidades alrededor de las rutas comerciales, infinitas, y la circulación de capitales en Europa era un síntoma de esto.

A mediados del siglo XVI, al otro lado del Atlántico, universidades como la Universidad Salamanca, a la vanguardia de pensadores religiosos como Juan Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, entre otros, dirimían sobre si la explotación y la subordinación de los indígenas era “justa”, “ética” y “legal”. Se llegó a la conclusión de que, en nombre de la fe y como labor evangelizadora, era legítimo sujetar a los aborígenes a la dominación, pues estos eran menores de edad propensos a ser educados en la religión y las “buenas costumbres”. Asimismo, se apeló a la bula papal “Inter caetera” (1493) de Alejandro VI, en donde se le daba la potestad sobre las almas de los habitantes del Nuevo Mundo a los reinos de Castilla y Portugal, y con ello las prebendas para desplegar toda la coerción estatal manifestada en sus diferentes instituciones: reales audiencias, cabildos, parroquias, entre otros. Es decir, tras una apariencia moral, se

* Historiador, Teólogo y Magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Maestro de cátedra del programa de Teología de la Fundación Universitaria Claretiana. Correo electrónico: juna_murillo@outlook.es.

escondían los intereses de la Corona española por ponerse a la vanguardia de los avatares exigentes del mundo moderno.

Ahora bien, gracias a problemas como la debacle de la población indígena a raíz de migraciones forzadas, enfermedades y otras crisis demográficas en general, el Estado español se vio en la obligación de establecer un sistema de dominio y control que garantizara su supervivencia, pues era necesaria mano de obra agrícola que proveyera los caminos mineros. Se hizo famosa la “Ley Nueva”¹, más por su incumplimiento que por su contenido. La figura de los oidores era la llamada a escuchar quejas y reclamos de la población sobre los malos tratos, pero la experiencia ya nos ha narrado el matrimonio indisoluble entre las formas de capital y el poder constituido... la corrupción estaba a la orden del día. Los negros de África llegaron a nuestras tierras para nutrir la división axial del trabajo y la internacionalización del capitalismo mercantil.

Hacia el siglo XVII, había ya en Europa centros económicos muy bien cimentados como Amberes, Bonn, entre otros. El movimiento del metal exigía mano de obra esclava para el sostenimiento del comercio mundializado. Ya desde el siglo XV los teólogos habían sugerido la carencia de alma de los pobladores de África y, bajo esta premisa, comerciantes portugueses se asentaron en Angola, Mozambique y Cabo Verde. Había una justificación metafísica e inmaterial para el dolor y el oprobio material. Llegados “los especímenes” negros al puerto de Cartagena de Indias eran sometidos a un proceso de civilización, su nombre era hispanizado y eran bautizados en la fe, listos para engrosar las minas que eran el sustento del aparato burocrático.

Para el siglo XVIII, con las Reformas borbónicas², y tras el relevo de dinastía (de los Austrias a los Borbones), el aparato estatal fue racionalizado y representado en figuras que propendían hacia una monarquía absoluta como lo eran los virreinos, intendencias o capitanías generales, entre otras. La condición del Nuevo Reino de Granada era la de colonia en el sentido estricto y dieciochesco de la palabra. Todas las formas de explotación se tornaron en justificaciones racionales para engrosar el poderío metropolitano en el gran comercio a escala mundial, en la plena competencia con ingleses y franceses. El caso de la provincia de Antioquia fue bastante representativo: acá los procesos de mestizaje se dieron bastante rápido y las personas habían adquirido buenos capitales y libertades a través del comercio. La labor de visitantes como Francisco Silvestre, Juan Antonio Mon y Velarde Pardo y Cienfuegos, entre otros, era la de lograr sujetar esa gran masa productiva a la Corona y sistematizar la compra y venta del trabajo y la mano de obra.

El siglo XVIII fue el de los despotismos ilustrados³. El grado de ilustración de un pueblo lo medía la forma en la que era capaz de arremeter contra la periferia del mundo y sujetarla a sus propios intereses. Toda esa retórica justificó la violencia a raíz de la “luz de la razón”.

Llegado el siglo de la Independencia, la élite criolla del Nuevo Reino de Granada, apeló a los “valores universales”, para librar una ficticia lucha de buenos contra malos por la emancipación. Todo el corpus y el aparato político que nació después de esto sólo es la explicitación de sus

¹ La llamada “Ley Nueva” se firmó en España en 1542. Sirvió para darles a los nativos de América la condición de vasallos, no de esclavos. Fue un antecedente legal del derecho internacional.

² Después del año de 1700, los Borbones, dinastía de origen francesa, accedieron al trono de la Corona española. Ellos propugnaron por reformar profundamente la estructura de gobierno para acoplar a los reinos de la península ibérica y de ultramar a las dinámicas modernas del mundo Ilustrado.

³ Los así llamados “despotismos ilustrados” fungieron en las coronas europeas entre los siglos XVII y XVIII. La finalidad de esta forma de organización gubernamental radicó en centralizar el poder en la figura del rey que representaba los variopintos organismos legales, económicos y jurídicos.

intereses de clase. Aquellos que abogaron por el centralismo eran parte de una clase dominante que desde tiempos coloniales intentaba seguir en la onda del control, mientras que aquellos que abogaron por el federalismo eran la oligarquía del Cauca, la tradición militar venezolana y los comerciantes antioqueños.

Tras la separación de la Gran Colombia⁴ el escenario constitucional fue el reflejo de una élite que quería justificar su accionar, su coacción y todas sus desmedidas desde lo fijo y lo legal. Claros ejemplos fueron los de José Ignacio de Márquez, con la instauración de una educación estatal para formar campesinos y trabajadores obedientes; de Ezequiel Rojas, José María Samper, y Manuel Murillo Toro, quienes estaban bastante pendientes de su industria y su comercio; de Tomás Cipriano de Mosquera, que viró entre liberales y conservadores, según cantaban sus amigos en Popayán. Desde el siglo XIX colombiano los procesos de formación de un Estado nacional moderno representaron conflictos inmensos, en donde se enfrentaban grupos oligárquicos ceñidos a prácticas aristocráticas y colectivos liberales, que pretendían insertar a la incipiente nación al conglomerado de países sometidos a la división internacional del trabajo y al comercio mundial.

El proyecto regenerador⁵, comandado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, hizo de la exclusión y la violencia al pensamiento diferente una herramienta válida para la política. Asimismo, los esfuerzos de Rafael Reyes por menguar esa violencia ya no respondían a las masas que se habían movilizado, por temor, hacia las zonas periféricas el territorio nacional. La pérdida del territorio panameño demostró que la soberanía no existe si no la termina de radicar una potencia extranjera como los Estados Unidos.

Después de la hegemonía conservadora, que se vivió tras la Guerra de los Mil Días, conflicto armado que fue la causante de grandes desplazamientos desde el campo, crisis económica, y la pérdida de Panamá, la presidencia de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo en la década de 1930 era vista con inmensa sospecha por los grupos élites que detentaban el poder. Los liberales eran asociados directamente con cosas como la masonería, el comunismo, la Revolución Mexicana y los bolcheviques soviéticos. El estigma era bastante dicente, y tiene que ver con las estrategias que ocupa el poder para deshumanizar a las personas, construir enemigos y hacer que el miedo y la zozobra proliferen.

En las décadas de 1920 y 1930, con el surgimiento de grupos obreros, la élite se atemoriza, y personas como Marco Fidel Suárez no vieron más opción que el fomento de la incursión norteamericana en los asuntos nacionales. La muerte de Gaitán en 1948 terminó de sepultar las esperanzas de las clases populares en la participación política. El temor y la incertidumbre se convirtieron en las políticas de un Estado que le seguía bailando al mejor postor. Después del gobierno de la Junta Militar⁶ en 1957, y la instauración del Frente Nacional en 1958, la exclusión política se volvió un hecho factual en el papel. El relevo del poder entre liberales y conservadores

⁴ El nombre “Gran Colombia” no es propio de la época, sino un constructo intelectual y una convención historiográfica que se asentó en 1886. Para la época de lo que se denominaba Gran Colombia, que abarca desde 1819 hasta 1831, bien se podría referir a este lapso de la historia como “proyecto nacional”.

⁵ La Regeneración fue un proyecto nacional impulsado por el presidente conservador Rafael Núñez y por el intelectual Miguel Antonio Caro en 1886. Este tuvo la premisa de que, en aras de evitar conflictos al interior del territorio colombiano, se precisaba forjar una identidad nacional fuerte basada en valores hispánicos, en la enseñanza de la lengua española y la educación religiosa de corte católico.

⁶ La Junta Militar, que se dio entre 1957 y 1958, al mando del General Gustavo Rojas Pinilla, tuvo como pretensión responder a las atrocidades vividas durante la violencia bipartidista, a la vez que se intentó involucrar a Colombia en procesos modernos de Estado.

facilitó el clientelismo político y fortaleció a los gamonales⁷ de cada región. La respuesta del Estado legalmente constituido fue siempre la bala. Si no, preguntémonos acerca del bombardeo a la república agrícola de Marquetalia⁸: campesinos que ante el miedo recurrieron a las armas, mientras que el Gobierno colombiano, timoneado por intereses estadounidenses, apelaba a la barbarie del ejército e ilimitaba los poderes de las fuerzas armadas. Todo lo considerado malo o perjudicial fue sistemáticamente exterminado.

Ayer, como en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, y XX, una clase oligárquica y aburguesada se tomó la vocería de la mayoría y decidió, desde una ética dudosa, el destino de muchas personas como en su tiempo fueron los indígenas, los negros, los comuneros, los artesanos, los campesinos...

2. La violencia y la exclusión de las alternativas políticas en los siglos XX y XXI

Durante todo el trasegar de la historia nacional, la exclusión de grupos sociales, la marginalización de personas con ideas políticas diferentes, y la invisibilidad de violencias estructurales e históricas es lo que realmente ha polarizado al país. A los habitantes de Colombia les gusta pensar el devenir político y los oprobios subsecuentes como una película vulgar de Hollywood, donde hay buenos y malos: por una parte, todos los adalides del Estado, los cultores de las buenas costumbres y las instituciones; por otro lado, subversivos que se fueron a dar bala a la montaña por deporte y avaricia, saliendo del cauce normal de la teleología del mundo civilizado. Las problemáticas sociales que se evidencian a nivel macroestructural, como la desigualdad económica o la pauperización del campo y las ciudades, son el terreno más idóneo y fértil para que se fragüen diversos aparatos ideológicos que solo mantienen un orden aparente de la vida. La ideología nubla la relación con la realidad, nos hace creer que, en nuestro mismo hermano, ha sido víctima de las mismas oligarquías y sus mecanismos infalibles de represión, o de la misma falta de oportunidades, está el enemigo. Hay un argumento que le fascina esgrimir a los veteranos: “ustedes son muy jóvenes y nos les tocó la guerra”; evidentemente llevan más tiempo habitando la tierra, así como llevan más tiempo viviendo dentro de un simulacro de la realidad donde medios de comunicación, el sistema educativo y las familias como reproductoras de la ideología, consciente e inconscientemente, se han puesto al servicio del capital, han alimentado la aversión entre los oprimidos, ha vendido una imagen impoluta del dominador como padre de la patria y ha mostrado a la vida del explotador como un bien deseable que quizá se alcance aceptando sus normas.

Algunos pensadores críticos de los imaginarios coloniales, tales como Frantz Fanon, han llegado a aducir que el dominado desea habitar los mismos espacios físicos y simbólicos de su señor; los subalternos añoran con acostarse con las mujeres e hijas de su capataz, con comprar los bienes suntuarios de su amo y vivir sus mismas dimensiones existenciales. Los colombianos aseguran que el panorama social y político es una película en donde los héroes son los miembros de las clases altas, porque consideran que la riqueza y esplendor de estos es producto del esfuerzo individual y del mérito. Cuando un actor social progresista aparece, inmediatamente se transforma en el villano de la película. Al villano, en pocas palabras, hay que exterminarlo, y para ello no hay que escatimar en esfuerzos.

⁷ Los gamonales, históricamente, han acumulado bienes económicos y capital político en diversos territorios de América Latina. Gracias a esto, tienen un fuerte influjo en asuntos gubernamentales, facilitando así su propio bienestar material.

⁸ La República Independiente de Marquetalia, fue una manera de organización política y social de grupos de campesinos que huían de la violencia estatal y se radicaron en el departamento del Tolima.

En Colombia, quienes han puesto en tela de juicio el sistema de dominación de una clase sobre otra, es tachado sin dilación como el antagonista. Los héroes, es decir, la capa poblacional dominante, poseen todas las artimañas para moverse a comodidad dentro del marco jurídico y normativo que ellos mismos han creado y que le brinda amparo a sus negocios y proyectos. Además de esto, tienen en las fuerzas coercitivas que detentan el monopolio de las armas a sus aliados naturales. Los que han recibido el estigma de la villanía, son inculcados por intentar transgredir un ordenamiento sociocultural que se yergue como natural e idóneo. Inmediatamente, se dice que los antagonistas son inherentemente malos. Tal visión maniquea decanta en la exclusión de sectores sociales enteros, que han intentado alzar sus voces por varios medios.

En diferentes colectivos, que han introyectado valores que los cohesionan (llámese a estos grupos: Iglesia como congregación de fieles, ejército, o Estados Nacionales), hay una pulsión libidinal que liga a los miembros entre sí y a cada individuo con el *ethos* comunitario. A su vez, se presenta una pulsión violenta contra todos aquellos individuos que no pertenecen a la masa o comunidad y se hace uso de diferentes herramientas ideológicas para la exclusión racionalizada de grupos humanos. Estos aparatos materiales y psicosociales abarcan discursos de odio que nutren los prejuicios y timonean los juicios valorativos sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo social; y se apoyan también sobre dictámenes jurídicos y empobrecimiento de la vida material.

Frente al desvalimiento que siente el hombre ante las fuerzas naturales y frente al sentimiento de ambivalencia que tiene ante la misma cultura que él ha creado (la añora, a la vez que la aborrece), crea maneras de representar al mundo en figuras potentes que lo salven de sí mismo, de los demás y de las fuerzas del cosmos. La retórica normativa de la sociedad se ha hecho de artefactos del lenguaje explicitados en instituciones como el matrimonio, el Estado y todas sus ramificaciones para monopolizar y redireccionar la violencia interna (subjetiva/cognitiva), y sus exteriorizaciones y objetivaciones políticas y sociales. A continuación, se va a mostrar cómo las dinámicas de exclusión social en nuestra historia reciente fraguaron el caldo idóneo para las repercusiones que, a día de hoy, seguimos viviendo.

Desde las décadas de 1930 y 1940, liberales y conservadores se hicieron a la tarea de gobernar de una forma clientelista, excluyendo cualquier dinámica de liberación social mediante el uso de la fuerza pública. La masacre de las Bananeras es solo una de las muestras paradigmáticas del grado de represión al cual podían llegar los gobiernos legítimamente constituidos y los agentes externos como el gobierno de Estados Unidos. Entre 1948 y 1958 se vivió la primera etapa de violencia, que se generó en un momento donde tanto el capital agroindustrial de los liberales, como la gran burguesía urbana entraron en conflicto con las familias tradicionales que fungían en el mundo rural desde el siglo XIX como personajes notables de la nobleza ultramontana del país.

Se formaron diversos grupos armados que causaron un gran éxodo dentro de la geografía nacional. Los sicarios del partido conservador y las alas más revolucionarias del lado liberal sembraron el terror en la zona rural. Frente al miedo generalizado por estos actores bélicos amparados por quienes fungían como mercenarios al servicio del Estado y los grandes terratenientes, se fueron formando repúblicas independientes, como la de Marquetalia, para defender su trabajo y la vida de sus hijos, y para exigir derechos y prerrogativas en este escenario tan agreste. El gobierno de los Estados Unidos había puesto sus ojos en el conflicto y desde el

año de 1962, bajo la dirección de Richard Rubbotom, se entrenaron grupos paramilitares de contrainsurgencia siguiendo los manuales de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Estos manuales les enseñaron a los gobiernos de América Latina cómo extirpar cualquier amenaza para los intereses del gran capital. Señalaban y vigilaban focos importantes de revolución en sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantes y profesores universitarios y algunos artistas. Entre algunos de estos manuales se cuentan: *Counter-Insurgency Operations* (1960), *Concepts for US Army Counterinsurgency Activities* (1962), and *Psychological Operations* (1962). Estos manuales ponían un acento sospechoso a actividades como el estudio de autores revolucionarios, las manifestaciones para pedir derechos laborales y diversas actividades artísticas, es decir, se estigmatizó a gran parte de la población. Por su parte, la élite local, los gamonales y caudillos del escenario regional transaban con importantes compañías extranjeras, que extendían la miseria hurtando los recursos de nuestra nación. Los grupos de contra-guerrillas entrenados por los militares norteamericanos, se estructuraron no solamente con las fuerzas regulares del Estado, sino también con civiles en aras de fijar a un enemigo interno. La población civil se tornó, entonces, en un objetivo de guerra.

En 1964, el abuelo de Paloma Valencia⁹, Guillermo León Valencia, presidente entre 1962 y 1966, ejecutó, orquestado desde Estados Unidos, el plan LASO para erradicar a la ya citada República Independiente de Marquetalia. Esto fue un plan de élites que falló y dio paso, naturalmente, a la defensa armada por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El operativo contra los rebeldes de las FARC estuvo comandado conjuntamente por las Fuerzas Armadas de Colombia y el General William Yarborough de los Estados Unidos, fundador de los Boinas Verdes¹⁰, y encargado de reevaluar acciones militares en Vietnam, Argelia y Cuba. Los protagonistas de esta operación aducían que la insurgencia era un mal natural de algunas gentes, proclive de cuajar en sectores de la población civil como líderes sindicales, líderes de movimientos campesinos, estudiantes de universidades públicas, o maestros de escuelas y universidades oficiales, entre otros¹¹. De esta forma, se negaba la agencia de algunos actores sociales, deshumanizándolos y extirpándolos del proyecto nacional.

Los mecanismos de represión por parte del Estado colombiano se matizaron de manera formal con la Doctrina de la Seguridad Nacional, amparada por Guillermo León Valencia, y por actores de la agenda internacional que avalaban cualquier método de acción en contra del comunismo. Efectivamente, fue en este escenario donde la teoría de la dependencia se hizo cada vez más clara. Los países periféricos como Colombia debían de someter a su población en edad productiva a una sobre explotación laboral que cubriera la necesidad de excedente de los Estados Unidos. Siguiendo esa línea de ideas, algunos de los mecanismos judiciales como el decreto 3398 de 1965, que después se convirtió en la ley 48 de 1968, que permitía que el Ejército entrenara y adoctrinara población civil para la defensa de la seguridad nacional, dieron fe de que el monopolio de la violencia legítima solo era y es la herramienta de coacción para mantener el dominio de las clases dirigentes, además del capital internacional, y anatematizar cualquier posibilidad de transformación¹². La contrainsurgencia a nivel nacional supo cómo armonizar factores como el miedo y la aversión a que agentes externos al *domus* nacional atentaran contra

⁹ Actual senadora por parte del partido Centro Democrático.

¹⁰ Los Boinas Verdes son una unidad de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos. Su función, básicamente, consiste en labores de inteligente, infiltración y contrainsurgencia.

¹¹ Doug Stokes, *America's Other War: Terrorizing Colombia* (Zed Books, 2005), 73.

¹² Edgar Barrero, *De Macondo a Mancuso: Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia* (Bogotá: Desde Abajo, 2006), 40-41.

el modo de vida que ya se conocía y en el que se vivía, la necesidad de las clases altas de mantener el *statu quo* racionalizando cualquier forma de conflicto y homogeneizando las tensiones sociales, revistiéndolas de violencia simbólica que parte de la ideología capitalista, dándoles preponderancia y agencia en el campo de la política. El Estatuto de Seguridad Nacional, implementado por el presidente César Turbay Ayala (1978-1982), permitía que la fuerza pública erradicara cualquier tipo de manifestación e inconformidad¹³.

Este nuevo actor armado, las FARC, se enfrentaron con grupos de contrainsurgencia (conocidos como paramilitares) que, aunque antidemocráticos, se pudieron acoplar a la mentalidad, la ideología y las estructuras mentales y materiales de un país, donde la clase dirigente había puesto una lápida sobre cualquier agente progresista, y donde los subordinados del capital pensaban que eran solo un mal necesario para mantener una escala de valores jerarquizada y muy estática. Tanto así que la alternancia de poder entre conservadores y liberales fue vista como un relevo de familias ennoblecidas culturalmente para propugnar por el orden y el progreso sin importar la exclusión de alternativas políticas.

Ahora bien, no se puede reducir el accionar de los paramilitares desde la década de 1960 hasta el siglo XXI a meros grupos de defensa local contra la criminalidad, pues desde épocas tempranas, amparados por los señores de la tierra, tenían un organigrama a nivel nacional bastante claro, además de una misión: exterminar la amenaza de la izquierda armada. El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 terminó de exacerbar los ánimos de comerciantes, ganaderos y agricultores.

En la década de 1980, los grupos más conservadores estaban perdiendo poder político frente a liberales que querían hacerse cargo de sus propios negocios y por ello coadyuvaron a procesos de paz con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, posteriormente, el Movimiento 19 de abril (M-19). La reorganización de las clases sociales en Colombia acarreó una cruel alianza entre los señores de la tierra, las compañías multinacionales y los zares de la cocaína. La izquierda organizada sufrió un genocidio producto del matrimonio de hostilidades de narcotraficantes, empresarios, terratenientes e inversores extranjeros.

En 1982, grupos encargados del tráfico de drogas, empresarios de Texaco¹⁴ y algunos terratenientes, formaron el grupo de defensa contra insurgentes llamado Muerte a Secuestradores (MAS). Pablo Escobar, el zar del cártel de la droga en Medellín, utilizó los servicios de seguridad de esta clase de grupos paramilitares. Muchos militares entrenaron a los miembros del MAS y les brindaron posiciones estratégicas. Poco a poco, la “vocación” de estos grupos que corrían paralelos a las armas del Estado, se tornó desde la autodefensa a brazos armados capaces de darle territorios deseables a corporaciones mineras, plantaciones de banano y grupos de ganaderos.

Entre 1984 y 1990, la Escuela de las Américas¹⁵ formó a varios militares de América Latina en tácticas de guerra de contrainsurgencia. Muchos de sus estudiantes, como el General Ramón

¹³ Francy Johana Parra Triana, “Una mirada antropológica sobre el conflicto, la desigualdad y los procesos de reinscripción social en Colombia” (Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid, 2016), 187-238.

¹⁴ Aclaración histórica: Empresa de hidrocarburos norteamericana, que tenía sede en la ciudad de Barrancabermeja (Santander).

¹⁵ La Escuela de las Américas, llamada “Instituto para la Cooperación en Seguridad del hemisferio occidental”, fue un organismo creado por el ejército de los Estados Unidos para asesorar a los países aliados en materia militar, brindando tácticas de inteligente y estrategias de combate.

Emilio Gil Bermúdez, estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos, vínculos con el MAS y exterminio sistemático de dirigentes de izquierda. Mientras César Gaviria abrió el país al neoliberalismo durante su presidencia entre 1990 y 1994, sus vínculos con el gobierno y el ejército de los Estados Unidos se hicieron más fuertes y concentraron sus esfuerzos por la erradicación de las drogas. No obstante, los mismos militares eran una parte integral del proceso de distribución de drogas, manteniendo la balanza comercial a favor de unos grupos económicos muy claros.

Ya para la década de 1990, varios actores hicieron presencia en la guerra irregular. Si bien el miedo al comunismo no dejó de ser la representación antagónica de lo deseado, ahora convergían en un mismo marco de acción narcotraficantes y cárteles de la droga. Más allá de la complejidad de la manera en que se lucraban los actores armados, hay algunos puntos de vital importancia que vale la pena resaltar. En primer lugar, el artículo 42 del Decreto Ley 356 de 1994, bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano, fue una clara autorización del gobierno para la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), que más que una respuesta a la criminalidad rural fueron la manera de institucionalizar una práctica, que, como se ha visto, ha sido bastante común a lo largo de la segunda parte del siglo XX. En segundo lugar, la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año de 1997 bajo la dirección de los hermanos Castaño Gil¹⁶, solo fue la explicitación de un fenómeno social que hace ya algunas décadas se venía presentando: la expansión de un proyecto nacional homogéneo y unívoco que uniera al brazo armado al margen de lo legal a las pretensiones de las fuerzas públicas del Estado. Las Autodefensas y las demás formas de paramilitarismo, no solo corrían de manera paralela al esquema burocrático del gobierno, sino que sus participaciones también eran bastante activas dentro del mismo

Los militares, policías y milicias irregulares nutridas por cárteles de drogas, hicieron de las suyas para regular el tráfico a su favor. Los Pepes¹⁷, por ejemplo, que variaban sus alianzas entre cárteles, fueron de mucha utilidad y brindaron mucha información a bloques de búsqueda policiales en la guerra contra las drogas en Medellín. Por otro lado, la situación económica de la década de 1990 era igualmente caótica y todo un caldo de cultivo para la violencia. Las importaciones de alimentos debilitaron a un ya famélico campo colombiano. La presencia de multinacionales dedicadas a la minería y a la extracción de petróleo como La British Petroleum Company firmó contratos con el ejército a cambio de cuidar oleoductos de la constante presencia de grupos disidentes como el ELN en Norte de Santander. Hubo constantes violaciones de derechos humanos por parte del mismo Ejército Nacional y la gota que rebasa el vaso fue el presidente Ernesto Samper y sus auténticos vínculos con el narcotráfico.

En el crepúsculo del siglo XX y los albores del nuevo milenio, el Plan Colombia se introdujo como una iniciativa conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, para detener el tráfico de drogas y lo que ellos denominaban el accionar de una “narcoguerrilla”. El despliegue de recursos económicos y humanos por parte de los Estados Unidos se dio, principalmente, a través de contratistas militares privados como la Military Professional Resources Incorporation (MPRI). Uno de los grandes inconvenientes presentados por este despliegue militar fue la persecución de población civil y detractores de gobierno a través de tácticas de inteligencia coordinadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno colombiano. Muchos de los

¹⁶ Carlos, Fidel y Vicente Castaño Gil fueron paramilitares oriundos de Amalfi, Antioquia. Fueron los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¹⁷ Los Pepes es un acrónimo para denominar a “Perseguidos por Pablo Escobar”. Era un grupo de sicarios y paramilitares fundados por antiguos socios del capo de Medellín y estaban financiados por el cártel de Cali.

funcionarios del DAS habrían recibido capacitación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y también equipos tecnológicos muy sofisticados usados para el espionaje.

La pesadilla que vivimos en Colombia entre 2002 y 2010 fue algo inigualable y funesto. Las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército nacional para hacer pasar a población civil como bajas en combate de las FARC, aparentemente, eran un fenómeno que se venía viviendo desde mediados de la década de 1990. La que el gobierno de Colombia declaró al narcotráfico y a los grupos armados de izquierda, se tradujo también en asesinatos, tortura y desaparición de la población civil.

“A partir de los datos sobre 5.763 ejecuciones denunciadas en Colombia y la amplia documentación de la asistencia de Estados Unidos al ejército colombiano, encontramos una correlación positiva entre las unidades y los oficiales que recibieron asistencia y capacitación de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Un análisis estadístico de 1.821 de estas ejecuciones en las que se identificaron directamente las unidades responsables mostró que las brigadas del Ejército que recibieron un nivel moderado en comparación con un nivel bajo de asistencia de los Estados Unidos se correlacionaron con diez ejecuciones más por brigada en los dos años posteriores a la asistencia. Si bien el análisis no muestra que la ayuda de Estados Unidos haya causado o alentado específicamente ejecuciones, arroja serias dudas sobre las afirmaciones de que la asistencia de Estados Unidos mejoró el desempeño en materia de derechos humanos”¹⁸.

Los falsos positivos como estrategia estatal fueron el pináculo de cualquier acto en detrimento de la dignidad humana. Ahí se demostró que la vida, al menos para el Estado colombiano, no es sagrada. Lo sagrado, pareciera, es el capital, las ganancias y mantener el orden social y políticamente establecido. Si es necesario, el Estado se va a encargar de demonizar a sectores enteros de la población, de tildarlos de vándalos, guerrilleros o terroristas.

3. Guerra psicológica en Colombia

La guerra psicológica en Colombia actúa de manera directa sobre los procesos de estructuración y construcción de sentido y significado de las personas. El problema se ve acrecentado cuando el Estado no es capaz de garantizar un ejercicio de convivencia y, por el contrario, se concatena a dinámicas de coerción y exterminio racionalizado y sistematizado. Algunas de las características que se encuentran alrededor de la guerra psicológica han sido señaladas por la psicóloga social Elizabeth Lira:

- 1) Sensación de vulnerabilidad
- 2) Un estado exacerbado de alerta
- 3) Sentimiento de impotencia o pérdida de control sobre la propia vida
- 4) Una alteración del sentido de realidad, al volverse imposible valorar las propias experiencias y conocimientos¹⁹.

La violencia física estaba acompañada del exterminio y la muerte simbólica de todas las personas que se salían de la construcción de las instituciones; todo aquel que quedaba por fuera del “hogar nacional”, del espacio mental de la vida en común civilizada, sufría un proceso de

¹⁸ Human Rights Watch. *Colombia's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States*. 1996.

¹⁹ Elizabeth Lira, *Psicología de la amenaza política y el miedo* (Santiago: Ed. ChileAmérica-CESOC, 1991), 33-51.

deshumanización. Uno de los casos paradigmáticos de la negación de la otredad, se presenta en una figura de gran rimbombancia en el teatro nacional. El Estado colombiano se ha valido de la estrategia de nutrirse de todo ese mercado de símbolos que provee el argot de las políticas neoliberales, mezclado con narcisismo nacionalista y viejas y primigenias formas del miedo, encarnadas en el envilecido comunista. Cuando se apela a llamar a los grupos insurgentes “bandidos” o “narcoterroristas”, lo que ocurre es una negación de las otras formas de subjetividad. Romper de lleno con la carga de significados de un proceso dialógico implica esa muerte del ser-otro en cuanto parte integrante de la unidad. Todo agente por fuera del Estado parte de una fuerza demiúrgica negativa que opera por fuera de los márgenes de la bondad y la justicia. Sin embargo, la concepción moderna y liberal del Estado se ha erigido con la única premisa de garantizar el monopolio de la violencia física y simbólica para el mantenimiento de los privilegios de una clase ennoblecida, que se sostiene sobre la sacralidad de la propiedad privada. Lenin ha afirmado: “mientras exista la propiedad privada, vuestro Estado, aunque sea una república democrática, no es otra cosa que una máquina en manos de los capitalistas destinada a aplastar a los obreros, y cuanto más libre sea el Estado, con tanta mayor claridad se manifiesta este hecho”²⁰. La pugna no radica, como lo han creído algunos, en liberalizar el mercado o darle más prerrogativas al Estado, la pelea debe ejecutarse en la reformulación de la noción estatal, que, incluso en el capitalismo tardío, es una clara herencia del esquema de explotación material y espiritual de tiempos pretéritos.

El proceso de guerra acarreado en Colombia tiene una premisa fundamental que consiste en la invisibilización de las luchas sociales: la miseria material en el campo debida a la expropiación de tierras por grandes terratenientes y, posteriormente, señores de la coca; la urbanización de la violencia y la criminalización de la protesta y la subalternidad; así como la falta de agenciamiento de grupos históricamente supeditados al gran capital, es un foco tremendo para que se fragüen todos estos ejercicios de movilización armada que se salen del “hogar nacional”. El psicólogo Joaquín Samayoa sugiere que la guerra trae consigo un proceso de deshumanización, en donde la sensibilidad frente al sufrimiento ajeno y la alteridad es vista como un obstáculo²¹. Desde la década de 1950 han aparecido varios adalides y cultores de las buenas costumbres que pelean en contra del fantasma creado por las élites. La propagación de medios de difusión masiva de información por el país fungió como herramienta para justificar las alianzas funestas entre una policía bastante politizada y grupos de mercenarios al servicio de las riquezas de una oligarquía tradicional. Ya desde la aparición de guerrillas comunistas, la lápida recae sobre cualquier ápice o muestra de insurgencia, el país se fragmenta en diversas territorialidades e identidades, donde todo lo que está por fuera de los intereses de los que monopolizaban los aparatos ideológicos del Estado es estigmatizado. El historiador Fernán González dijo:

“Esta mirada estereotipada hace desaparecer cualquier posibilidad de análisis objetivo, pues la percepción queda totalmente dominada por la diferenciación infantil entre lo bueno y lo malo, que tiende a la satanización y estigmatización del adversario, que queda concebido como enemigo absoluto, con el que no hay ninguna posibilidad de compromiso ni de campo común de identidad compartida”²².

La institucionalidad ha hecho una labor de inteligencia utilizando un espectro de lenguaje bastante fácil de ser repetido por la masa semiculta que está en ese estado constante de alerta.

²⁰ Vladimir Lenin, *El Estado y la revolución* (Madrid: Fundación Federico Engels, 1991), 23.

²¹ Joaquín Samayoa, “Guerra y deshumanización: una perspectiva psicosocial”, *Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia*, ed. Ignacio Martín Baró (San Salvador: UCA Editores, 1990), 41-60.

²² Fernán González, *Poder y violencia en Colombia* (Bogotá: Odecofi/Cinép/Colciencias, 2014), 56.

Escuchar expresiones como “buenos muertos”, “seguro se lo buscó”, no dista mucho de cualquier persona que sugeriría que los jóvenes ejecutados por el ejército “seguramente estaban delinquiendo”. Asimismo, esa confianza infantil en quienes portan las armas de la burguesía agroindustrial bajo la figura de fuerzas armadas permite ver como una anomalía los casos de corrupción y narcotráfico, cuando estos son el curso normal de un grupo bélico al servicio de los capitalistas. Lo mismo pasa con la campaña anticorrupción del presidente Iván Duque del Centro Democrático, es vista como un ejercicio de tutelaje paternalista para minar un problema, sin tener en cuenta que la misma corrupción sigue el tránsito microestructural del sistema económico macro; por eso Marx aduce: “el gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”²³.

Bibliografía

- Barrero, Edgar. *De Macondo a Mancuso: Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia*. Bogotá: Desde Abajo, 2006.
- González, Fernán. *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi/Cinep/Colciencias, 2014.
- Human Rights Watch. *Colombia's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States*. 1996.
- Lenin, Vladimir. *El Estado y la revolución*. Madrid: Fundación Federico Engels, 1991.
- Lira, Elizabeth. *Psicología de la amenaza política y el miedo*. Santiago: Ed. ChileAmérica-CESOC, 1991.
- Marx, Karl y Engels, Federico. *Manifiesto del partido comunista*. Moscú: Editorial Progreso, 1971.
- Parra Triana, Francy Johanna. “Una mirada antropológica sobre el conflicto, la desigualdad y los procesos de reinserción social en Colombia”. Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid, 2016.
- Samayoa, Joaquín. “Guerra y deshumanización: una perspectiva psicosocial”. *Psicología Social de la Guerra: Trauma y terapia*, ed. Ignacio Martín Baró. San Salvador: UCA Editores, 1990, 41-60.
- Stokes, Doug. *America's Other War: Terrorizing Colombia*. Zed Books, 2005.

²³ Karl Marx y Federico Engels, *Manifiesto del partido comunista* (Moscú: Editorial Progreso, 1971), 37.